

Bruselas, **XXX**
[...](2021) **XXX** draft

ANNEXES 1 to 5

ANEXOS

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha

ANEXO I - MAPA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

- 1) En el anexo se exponen las metodologías recomendadas para llevar a cabo el mapa detallado que apoye las intervenciones de ayuda estatal para el despliegue de redes fijas y móviles.
- 2) Su objetivo es aumentar la transparencia de la metodología para recopilar y evaluar información sobre la disponibilidad y el rendimiento de las redes.
- 3) En el anexo se enumeran, para las redes de acceso fijas y para las redes de acceso inalámbricas móviles y fijas:
 - i. los criterios que se utilizarán para cartografiar el rendimiento de las redes; y
 - ii. los datos que las autoridades públicas competentes podrán recopilar para verificar la exactitud de la información facilitada; y
 - iii. la información adicional sobre la infraestructura que las autoridades públicas competentes pueden solicitar a los operadores en situaciones específicas, cuando esté debidamente justificado para llevar a cabo una evaluación en profundidad¹.

2. OBJETIVOS Y DEFINICIONES

- 4) El objetivo del mapa detallado es tener una representación objetiva del «rendimiento alcanzable» que pueda esperarse en «condiciones de máxima demanda».
- 5) El «rendimiento alcanzable» debe estar caracterizado al menos en cuanto a las velocidades de descarga y carga que puedan esperarse en condiciones de máxima demanda.
- 6) Las autoridades públicas responsables de la intervención pública pueden cartografiar también otros criterios de rendimiento para caracterizar el rendimiento de las redes en condiciones de máxima demanda (por ejemplo, latencia, pérdida de paquetes, error en el paquete, fluctuación de fase, disponibilidad de servicio²). Los Estados miembros podrán optar por hacerlo con el fin de facilitar que la intervención pública se centre en las deficiencias del mercado y de garantizar un cambio considerable adecuado.
- 7) Máxima demanda es la hora del día con una duración típica de una hora en la que la carga de red suele tener su máximo³. La máxima demanda puede variar según los Estados miembros y las regiones. En consecuencia, para saber cuál es la máxima demanda más problemática, debería consultarse a las ANR.

¹ Esto podrá ser objeto de tratamiento confidencial de conformidad con la legislación nacional, según proceda.

² Para estos criterios de calidad deberían utilizarse las especificaciones técnicas del ORECE: Ratio de error del paquete IP (Y.1540); Ratio de pérdida de paquetes IP (Y.1540); Tiempo de ida y vuelta del paquete IP (RFC 2681); Fluctuación de fase IP (RFC 3393); Disponibilidad del servicio IP (Y.1540).

³ BEREC BoR (20) 165.

- 8) Las «condiciones de máxima demanda» son las condiciones que se espera que experimente la red en el momento de máxima demanda. En la sección 3.1, relativa a las redes de acceso fijo, y en la sección 4.1, relativa a las redes de acceso inalámbrico móviles y fijas, se enumeran las condiciones adecuadas de máxima demanda.
- 9) El mapa detallado debe llevarse a cabo a nivel de dirección para las redes de acceso inalámbrico fijas y de acceso fijo sobre la base de «locales atravesados» y a nivel de dirección o sobre la base de cuadrículas de un máximo⁴ de 100 x 100 metros⁵ para las redes móviles.
- 10) «Locales atravesados»: locales que pueden conectarse en un breve período de tiempo a la tarifa normal de activación para el usuario final, independientemente de si dichos locales están conectados a la red. Una parte interesada puede notificar los locales como atravesados solo si, a petición de un usuario final, se compromete a conectar los locales y a activar el servicio en un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha de la solicitud, aplicando las cuotas normales de activación, es decir, sin ningún coste adicional o excepcional y, en cualquier caso, sin rebasar la tarifa promedio de activación en el Estado miembro de que se trate.
- 11) Al comunicar la información sobre el rendimiento de sus redes, las partes interesadas deberían respetar las normas científicas y profesionales más estrictas. En particular, la metodología y las técnicas utilizadas a efectos de establecer el mapa detallado deberían derivarse de normas profesionales aceptadas.
- 12) Al facilitar las cifras de rendimiento, los operadores deben considerar cualquier cuello de botella que pueda impedirles alcanzar realmente el rendimiento declarado (por ejemplo, el retorno). En caso de que los operadores no confirmen que han facilitado la información sobre esta base, los Estados miembros podrán no tenerla en cuenta.
- 13) Por lo que se refiere a los métodos alternativos para realizar el mapa detallado, por ejemplo, en el caso de las redes fijas con conmutación de paquetes, las autoridades públicas podrán proponer como alternativa, cuando esté debidamente justificado, utilizar un factor de utilización del 20 % de los enlaces más cargados (cuellos de botella), definido como la tasa media de tráfico dividida por la tasa nominal, en el momento de máxima demanda. En el caso de las redes inalámbricas y móviles, las autoridades públicas pueden proponer un método alternativo, por ejemplo en términos de cálculo con una probabilidad en borde de celda del 95 % o en términos del cálculo de la carga de la celda nominal⁶ no inferior al 50 %⁷. En cualquier caso, independientemente del método que se utilice, todas las cifras de rendimiento de la red deben facilitarse en términos de «condiciones de máxima demanda», de conformidad con el apartado (8).

⁴ Se consideran preferibles cuadrículas más pequeñas (por ejemplo, 20 x 20 metros).

⁵ Los datos deberían presentarse en forma de zonas geográficas (polígonos) (datos ráster y vectoriales).

⁶ «Carga de la celda»: porcentaje medio de los recursos de una estación de base que utilizan los usuarios finales con respecto a un servicio determinado.

⁷ Si la carga de la celda resultante es inferior al 50 %, los operadores deberían justificarlo debidamente ante las autoridades públicas competentes.

3. MÉTODO RECOMENDADO PARA CARTOGRAFIAR LAS VELOCIDADES DE LAS REDES DE ACCESO FIJO

3.1. CRITERIOS PARA CARTOGRAFIAR LAS VELOCIDADES DE LAS REDES DE ACCESO FIJO

- 14) A efectos de este método para realizar el mapa detallado, los Estados miembros deben pedir a las partes interesadas que faciliten información sobre la velocidad proporcionada por su red en condiciones de máxima demanda.
- 15) Se entiende por condiciones de máxima demanda cada vez que un mínimo del 20 % de los usuarios están activos y transmiten simultáneamente a la velocidad máxima nominal proporcionada por el operador a cada uno de ellos, tanto en sentido descendente como ascendente, lo que se corresponde con la definición habitual de tasa de sobresuscripción⁸.

3.2. INFORMACIÓN A EFECTOS DE VERIFICACIÓN: BUENAS PRÁCTICAS

- 16) Para limitar los riesgos de comportamientos oportunistas por parte de las partes interesadas y garantizar que la información facilitada sea suficiente, coherente y digna de confianza, con el fin de evitar que se retrase la prestación de servicios en la zona objetivo, las autoridades públicas competentes que realicen el mapa detallado podrían decidir pedir a las partes interesadas que presenten más información sobre sus redes a efectos de verificación.
- 17) Las autoridades públicas competentes podrían exigir a las partes interesadas que facilitasen una descripción completa de la metodología utilizada para calcular su rendimiento alcanzable, que incluya, entre otras cosas:
 - i. la tecnología de red de acceso utilizada (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL + vectoring DOCSIS.x, etc.), con la especificación completa del estándar correspondiente;
 - ii. la topología de la red (por ejemplo, P2P o P2MP), incluido un gráfico simplificado que refleje la disposición física de los cables/fibras (por ejemplo, una topología de árbol en una GPON);
 - iii. los enlaces de cuello de botella en la topología de la red, definidos como los segmentos de red con mayor ganancia de multiplexación estadística, incluida información clara sobre i) la tasa de sobresuscripción utilizada para dimensionar dicho enlace (por ejemplo, en la red de retorno) o ii) el ejercicio de planificación de capacidad realizado para dichos enlaces de cuello de botella. En cualquier caso, la autoridad pública puede solicitar una caracterización estadística de la velocidad alcanzable para un usuario final (por ejemplo, la velocidad media o típica o la probabilidad de alcanzar la velocidad nominal que debe facilitarse al usuario final en cualquier

⁸ La misma infraestructura de red puede ofrecer niveles de rendimiento muy diferentes a los usuarios finales en función del número de usuarios multiplexados en enlaces con cuellos de botella y de cuál es su velocidad nominal. El rendimiento depende del número de usuarios activos simultáneamente (que aumenta en las condiciones de máxima demanda). Esta «ganancia de multiplexación estadística» (mínimo del 20 %, es decir, nivel de actividad 1:5) exige también que los operadores utilicen modelos de distribución del tráfico de usuarios lo suficientemente precisos.

momento, con indicación de las hipótesis del modelo de usuario).

3.3. INFORMACIÓN A EFECTOS DE VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA: BUENAS PRÁCTICAS

- 18) Las autoridades públicas competentes pueden decidir exigir a las partes interesadas que presenten más información sobre los componentes de la red y su ubicación a efectos de verificación exhaustiva, por ejemplo, para revisar la metodología utilizada para calcular el rendimiento presentado.
- 19) Así pues, las autoridades públicas competentes pueden pedir a los operadores que presenten información adicional sobre la parte de acceso de la red fija, que incluya, aunque no solo:
 - i. la ubicación de los distribuidores y la distancia entre el distribuidor y el hogar;
 - ii. información clara sobre los cálculos de balance de enlace (por ejemplo, sobre cómo se asigna el nivel de potencia de la señal recibida a velocidades de bit, márgenes del balance de enlace utilizados, etc.). Las autoridades públicas competentes pueden pedir a los operadores que faciliten todos los balances de enlace aplicables utilizados para diseñar y dimensionar los servicios de red, junto con sus parámetros clave, incluida la descripción de la metodología seguida por el operador para desarrollar el balance de enlace y la justificación.

4. MÉTODO RECOMENDADO PARA CARTOGRAFIAR LAS REDES DE ACCESO INALÁMBRICO MÓVILES Y FIJAS

4.1. CRITERIOS PARA CARTOGRAFIAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES DE ACCESO INALÁMBRICO MÓVILES Y FIJAS

- 20) A efectos de este método para realizar el mapa detallado, los Estados miembros deberían solicitar a las partes interesadas que calculen su rendimiento de la red teniendo en cuenta los siguientes principios:
 - i. utilizar las mejores prácticas del sector⁹ teniendo en cuenta todos los efectos principales para la propagación de señales inalámbricas¹⁰;
 - ii. basar el cálculo en un 95 % de probabilidad de alcanzar el rendimiento declarado en borde de celda¹¹ y, en cualquier caso, no menos del 95 % en cada uno de los puntos de la cuadrícula, teniendo en cuenta las posibles variaciones de las condiciones de propagación debidas a efectos aleatorios y posibles variaciones entre los puntos dentro de la zona considerada (es

⁹ Las mejores prácticas del sector son parámetros de modelización, herramientas, planificación y límites de error que son comunes en la planificación de los sistemas y empresas de comunicaciones inalámbricas, y que los expertos en la materia pueden considerar suficientemente fieles y correctos si tuvieran que verificar la metodología.

¹⁰ Como el terreno, el edificio y el eco al predecir la potencia de la señal recibida.

¹¹ Por «probabilidad en borde de celda» se entiende la probabilidad de que se alcance el rendimiento mínimo en el extremo final de la zona de cobertura (distancia de cobertura máxima declarada en la zona considerada). El cálculo tiene que basarse en simulaciones de propagación realistas, cálculos del balance de enlace y márgenes suficientes.

decir, a nivel de dirección o base de cuadrículas de un máximo de 100 x 100 metros);

- iii. suponer que las condiciones de máxima demanda son las siguientes:
 - a. en el caso de las redes móviles, una carga nominal de la celda¹² no inferior al 50 % ¹³o superior en caso de que las condiciones de tráfico en el momento de máxima demanda sean significativamente superiores;
 - b. en el caso de las redes fijas de acceso inalámbrico, deberían utilizarse las condiciones realistas de tráfico en el momento de máxima demanda para obtener la carga de la celda adecuada para los cálculos¹⁴;
 - iv. comunicar el rendimiento por usuario final y sobre la base de antenas exteriores. Si una antena receptora se comparte entre múltiples usuarios finales, el rendimiento global debería considerarse compartido equitativamente entre los usuarios finales¹⁵;
 - v. comunicar el rendimiento por tecnología y frecuencia de funcionamiento en el caso de cobertura con múltiples tecnologías¹⁶ y frecuencias múltiples¹⁷, teniendo en cuenta el ancho de banda realmente disponible por frecuencia. En el caso de uso de frecuencias sin licencia, debería indicarse claramente.
- 21) De conformidad con el apartado (12), los operadores deben considerar, en particular:
- i. el tipo¹⁸ de retorno y su capacidad para cada estación de base¹⁹;
 - ii. en el caso de las redes de acceso inalámbricas fijas, el número de locales servidos y atravesados en cada cuadrícula calculada.

¹² «Carga de la celda»: porcentaje medio de los recursos de una estación de base que utilizan los usuarios finales con respecto a un servicio determinado.

¹³ Si la carga de la celda resultante es inferior al 50 %, debería justificarse debidamente ante las autoridades públicas competentes.

¹⁴ Si no se utiliza la estimación del tráfico máximo, se utilizará la carga nominal de la celda del 90 % para el acceso inalámbrico fijo. La carga de la celda más elevada para el acceso inalámbrico fijo (en comparación con las redes móviles) refleja el patrón de uso diferente previsto, lo que da lugar a una mayor competencia por el uso compartido de los recursos de la estación de base de servicio.

¹⁵ En el acceso inalámbrico fijo, este puede ser el caso de las antenas compartidas situadas en el tejado de los edificios de varias viviendas.

¹⁶ Tecnologías 3G UMTS y HSPA; tecnologías 4G LTE o LTE-advanced; 5G, ya sea 3GPP Release 15 (New Radio (NR) no autónoma - la red troncal es 4G) y NR autónoma (la red troncal es 5G) y otros desarrollos - 3GPP Release 16 que se está desarrollando e incluirá nuevas especificaciones para 5G. La autoridad competente puede, y es recomendable que lo haga, recopilar información de las tecnologías basadas en 3GPP para que puedan conocerse los niveles de 3GPP Release utilizados, pero la granularidad previa también es adecuada.

¹⁷ Se trata de separar las bandas de frecuencia sub-6 GHz y las de ondas milimétricas, ya que se suelen utilizar para diferentes categorías de servicios.

¹⁸ Fibra óptica, cobre portador Ethernet, inalámbrico, etc.

¹⁹ En el caso de la conexión de fibra óptica, normalmente puede suponerse que es suficiente.

4.2. INFORMACIÓN A EFECTOS DE VERIFICACIÓN: BUENAS PRÁCTICAS

- 22) Para limitar los riesgos de comportamientos oportunistas por parte de las partes interesadas y garantizar que la información facilitada sea suficiente, coherente y digna de confianza, con el fin de evitar que se retrase la prestación de servicios en la zona objetivo, las autoridades públicas competentes que realicen el mapa detallado podrían decidir pedir a las partes interesadas que presenten más información a efectos de verificación.
- 23) Las autoridades públicas competentes podrían así pedir a las partes interesadas que facilitasen una descripción completa de la metodología utilizada para calcular su rendimiento alcanzable, que incluya, entre otras cosas:
- i. modelos de propagación y parámetros clave para la simulación de propagación;
 - ii. información general sobre los componentes de la red y, en particular, sobre las antenas (por ejemplo, potencia de transmisión, MIMO, localización del emplazamiento de las antenas);
 - iii. información clave sobre el cálculo del balance de enlace (por ejemplo, cómo se asigna el nivel de potencia de la señal recibida a tasas de variación, márgenes del balance de enlace utilizados, etc.). Las partes interesadas deberían facilitar todos los balances de enlace aplicables utilizados para diseñar y dimensionar los servicios de red, junto con sus parámetros clave, incluida también la descripción del modo en que las partes interesadas han desarrollado el balance de enlace y su justificación.
 - iv. la ubicación de los emplazamientos de celdas.
 - v. características del retorno.

4.3. INFORMACIÓN A EFECTOS DE VERIFICACIÓN DETALLADA: BUENAS PRÁCTICAS

- 24) Las autoridades públicas competentes pueden decidir exigir a las partes interesadas que presenten más información sobre los componentes de la red y su ubicación a efectos de verificación exhaustiva, por ejemplo, para revisar la metodología utilizada para calcular el rendimiento presentado. Las autoridades públicas competentes podrían así pedir a las partes interesadas que presenten información adicional sobre sus redes, que incluya, aunque no solo:
- i. el número de transmisores en cada emplazamiento;
 - ii. la elevación del terreno de dichos transmisores;
 - iii. el número de sectores en cada emplazamiento de celdas;
 - iv. la tecnología utilizada en los transmisores, incluido el orden MIMO, ancho de banda disponible por canal;
 - v. la potencia efectiva de transmisión isotrópica utilizada por cada transmisor.

ANEXO II — INTERVENCIONES PÚBLICAS QUE NO ENTRAN EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 107, APARTADO 1, DEL TFUE

- 1) En las secciones siguientes se presenta una amplia panorámica, aunque no exhaustiva, de casos en los que no se aplican las presentes Directrices. Dado el carácter acumulativo de los criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE, si no se cumple uno de los criterios, puede descartarse la presencia de ayuda estatal y, por lo tanto, no es necesario notificar la medida a la Comisión antes de su aplicación con arreglo a las presentes Directrices.

5. NO EXISTE ACTIVIDAD ECONÓMICA

- 2) Las ayudas para actividades que no son de carácter económico²⁰, es decir, que no se utilizan para ofrecer bienes o servicios en el mercado, no se consideran ayudas estatales. Por consiguiente, la financiación de infraestructuras que no estén destinadas a ser explotadas económicamente queda en principio excluida de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Esto se refiere, por ejemplo, a los casos en que se asigna financiación pública para construir infraestructuras o contratar servicios de banda ancha para satisfacer las necesidades propias de la administración pública, como conectar únicamente a las autoridades públicas entre sí a través de «redes cerradas» no utilizadas para ninguna explotación comercial²¹. Por consiguiente, la financiación de tales actividades queda fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, al igual que, en consecuencia, la financiación pública de las «redes cerradas» conexas²².
- 3) No obstante, si dicha red (por ejemplo, su capacidad adicional) se pone a disposición de inversores comerciales de banda ancha u otros operadores, la financiación pública de dicha infraestructura puede constituir ayuda estatal. Del mismo modo, si posteriormente se pone a disposición una «red cerrada» inicial para uso comercial, puede que se apliquen las normas sobre ayudas estatales²³. Por ejemplo, cuando las autoridades públicas seleccionan a un tercero como proveedor de servicios de conectividad y financian la construcción de una red para satisfacer sus propias necesidades, puede haber ayuda estatal si este proveedor utiliza la infraestructura para otras actividades comerciales.
- 4) Si una infraestructura de banda ancha se utiliza tanto para actividades económicas como no económicas, la financiación pública de la misma estará sujeta a las normas sobre ayudas estatales en la medida en que cubra costes relacionados con las

²⁰ Véase la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal), apartados 201 y ss. (DO C 262 de 19.7.2016, p. 1).

²¹ Véase la Decisión C(2007)2212 final de la Comisión, de 30 de mayo de 2007, en el asunto N 46/07 – Reino Unido – Régimen relativo a la red del sector público de Gales (DO C 157 de 10.7.2007, p. 3).

²² Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2012, *Mitteldeutsche Flughafen y Flughafen Leipzig-Halle/Comisión*, C-288/11, ECLI:EU:C:2012:821, apartado 42; Decisión C(2007) 2212 de la Comisión, de 30 de mayo de 2007, en el asunto N 46/07 – Reino Unido – Régimen relativo a la red del sector público de Gales (DO C 157 de 10.7.2007, p. 3).

²³ Véanse la Decisión C(2011) 3498 final de la Comisión, de 23 de mayo de 2011, en el asunto SA.31687 (N 436/2010) — Italia — Banda ancha en Friuli -Venecia Julia (Proyecto Hermes) (DO C 274 de 17.9.2011, p. 3) y la Decisión C(2010) 5696 de la Comisión, de 11 de agosto de 2010, en el asunto N 407/09 — España — Fibra óptica Cataluña (Xarxa Oberta) (DO C 259 de 25.9.2010, p. 1).

actividades económicas en cuestión²⁴. Para evitar entrar en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales en lo que respecta a las actividades económicas, los Estados miembros tienen que garantizar que la financiación pública proporcionada para las actividades no económicas no pueda utilizarse para subvencionar de forma cruzada las actividades económicas de la entidad, por ejemplo, asegurándose de que el operador que utiliza la red con fines comerciales pague un precio de mercado por este uso de la red y limitando la financiación pública únicamente al coste neto (incluido el coste de capital) de las actividades no económicas, que se identificarán sobre la base de una clara separación de cuentas²⁵.

6. AUSENCIA DE RECURSOS ESTATALES/NO EXISTE SELECTIVIDAD

6.1. MEDIDAS NO MONETARIAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA

- 5) Los Estados miembros pueden optar por fomentar la demanda de servicios de banda ancha con medidas no monetarias que incidan en la demanda. En principio, las medidas no monetarias que incidan en la demanda no constituyen ayuda estatal. Pueden adoptar diversas formas.
- 6) Podrían ser medidas destinadas a aumentar el valor percibido del acceso a internet de banda ancha abordando aspectos de la demanda de banda ancha distintos del precio. Estas medidas suelen tener por objeto aumentar la calidad de los contenidos disponibles²⁶ o informar a los consumidores sobre cómo hacer uso de ellos.
- 7) Las medidas no monetarias que inciden en la demanda también pueden adoptar la forma de herramientas de agregación de la demanda que pueden utilizarse para reducir la incertidumbre sobre el tamaño de un mercado para los proveedores potenciales, coordinar la demanda y ofrecer más certidumbre sobre los beneficios probables de entrar en un mercado específico. Esto puede hacerse midiendo primero la demanda potencial mediante encuestas y, después, presentando los resultados de las encuestas en un sitio web de las autoridades públicas accesible al público. Esto puede incluir un elemento de apoyo general de los usuarios antes del despliegue, por ejemplo a través de plataformas de servicios, para verificar y agregar un determinado nivel de demanda antes de la inversión pública o privada. Los usuarios también pueden tener la opción de convertirse en partes interesadas de un proyecto a través de modelos de inversión de abajo arriba/autogestión, como las cooperativas. Esta información debería ponerse a disposición de todos los operadores en condiciones no discriminatorias. Sin embargo, si la demanda así agregada solo se pone a disposición de uno o varios operadores seleccionados, por ejemplo agrupando clientes en un único contrato, o incluyendo un elemento del compromiso de los usuarios de

²⁴ Véase la Decisión de la Comisión C(2010) 5696, de 11 de agosto de 2010, en el asunto N 407/09 — España— Fibra óptica Cataluña (Xarxa Oberta) (DO C 259 de 25.9.2010, p. 1). Véase también el apartado 205 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

²⁵ Véase el apartado 206 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal. El CAPEX (y las amortizaciones conexas) utilizado tanto para actividades económicas como no económicas tendría que distribuirse entre las dos actividades sobre la base de las claves de reparto pertinentes.

²⁶ Entre otros: i) la promoción de programas de administración electrónica (por ejemplo, telemedicina, asistencia electrónica, educación a distancia, TIC en las escuelas); ii) la promoción de contenidos digitales locales y sectoriales (por ejemplo, patrimonio cultural, turismo, contenido educativo, agricultura/productos alimenticios locales, etc.); iii) el aumento de la seguridad y la privacidad en Internet y el establecimiento de normas de calidad o publicidad.

abonarse a un único o a algunos operadores, esto podría constituir una ayuda estatal a dichos operadores.

6.2. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y REGULADORAS

- 8) Los Estados miembros pueden elegir varios tipos de medidas con el fin de acelerar el despliegue de redes de banda ancha, entre otras, las redes 5G, además de proporcionar financiación directa a las empresas²⁷. Pueden, en cumplimiento de las obligaciones legales (o superando dichas obligaciones), facilitar, por ejemplo, el proceso de concesión de derechos de paso²⁸ y/o exigir que los operadores de redes compartan parte de su infraestructura. Además, en consonancia con las normas reguladoras, los Estados miembros podrían exigir que los operadores tengan acceso a infraestructuras físicas controladas por organismos públicos, que puedan albergar elementos de redes de muy alta velocidad²⁹.
- 9) Los operadores que deseen desplegar redes de muy alta velocidad pueden solicitar a las empresas de redes de comunicaciones electrónicas, gas, electricidad, calefacción y agua que realizan obras de ingeniería civil, financiadas total o parcialmente por fondos públicos, que atiendan las demandas razonables de coordinación de las obras de ingeniería civil, siempre que ello no suponga costes adicionales y no obstaculice el control de la coordinación de las obras³⁰. Esta coordinación no constituirá ayuda estatal siempre que el operador solicitante corra con sus propios costes y la oportunidad se ofrezca de manera transparente y no discriminatoria a todos los operadores interesados (de electricidad, gas, servicios de abastecimiento de agua, etc.) y no solo a los operadores de comunicaciones electrónicas³¹. No obstante, no puede descartarse que la financiación pública de tales obras pueda implicar ayuda

²⁷ Como también se explica en la Recomendación de la Comisión sobre un conjunto de instrumentos de conectividad, la Recomendación de la Comisión de 18.9.2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para reducir el coste del despliegue de redes de muy alta capacidad y garantizar un acceso al espectro radioeléctrico 5G oportuno y favorable a la inversión, a fin de fomentar la conectividad y ponerla al servicio de la recuperación económica en la Unión tras la crisis de la COVID-19 [C(2020) 6270 final].

²⁸ La Directiva de reducción de costes de la banda ancha [Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (DO L 155 de 23.5.2014, p. 1)] prevé procedimientos de concesión de permisos más rápidos, sencillos y transparentes.

²⁹ Según la Directiva de reducción de costes de la banda ancha, los edificios nuevos deberían estar equipados con infraestructuras físicas de alta velocidad (como miniconductos) y proporcionar acceso a la infraestructura interior del edificio.

³⁰ Las obras de ingeniería civil, como pueden ser las excavaciones para instalar la banda ancha de alta velocidad, suponen hasta el 80 % del coste del despliegue de redes de alta velocidad.

³¹ Véase la Decisión de la Comisión C (2010) 889 de 8 de febrero de 2010, en el asunto N 383/09 — Alemania — Modificación del régimen de ayudas estatales a la banda ancha N 150/2008 — Banda ancha en zonas rurales de Sajonia (DO C 93 de 13.4.2010, p. 8). Este asunto se refiere a una situación en la que las obras de ingeniería civil general, como el mantenimiento de carreteras, no constituyen ayudas estatales. Las medidas adoptadas por las autoridades alemanas constituían «obras generales de ingeniería civil» que el Estado habría ejecutado en cualquier caso, con fines de mantenimiento. La posibilidad de instalar conducciones e infraestructuras de banda ancha al realizar las obras de mantenimiento de carreteras (y corriendo los operadores con los gastos) se anunció públicamente y no se limitó ni orientó hacia el sector de la banda ancha. No obstante, no puede excluirse que la financiación pública de tales obras pueda estar comprendida en el concepto de ayuda del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se limitan o están claramente orientadas al sector de la banda ancha.

estatal si están limitadas o claramente destinadas al sector de la banda ancha o a uno o varios operadores de banda ancha seleccionados.

- 10) Con el fin de facilitar el acceso a la infraestructura física existente de manera transparente, los proveedores de redes públicas de comunicaciones tienen derecho a acceder, previa solicitud, a información mínima sobre la ubicación y la ruta, el tipo y el uso actual de la infraestructura, y a un punto de contacto.
- 11) La Recomendación sobre un conjunto de instrumentos de conectividad establece orientaciones para el desarrollo de mejores prácticas con el fin de fomentar la conectividad, a partir de la Directiva sobre la reducción de los costes de la banda ancha y de las disposiciones del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, con el objetivo de determinar las medidas más eficientes para permitir a los operadores implantar redes de muy alta capacidad y animarles a ello. El 25 de marzo de 2021, la Comisión adoptó un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la conectividad³², que consiste en un conjunto de mejores prácticas que se consideran las más eficientes a la hora de permitir a los operadores implantar redes de muy alta capacidad y animarlos a ello.

7. AUSENCIA DE VENTAJAS

7.1. INVERSIONES CONFORMES AL MERCADO

- 12) Si una autoridad pública invierte en el desarrollo de infraestructuras de banda ancha en condiciones comparables a las de un inversor privado que opera en condiciones normales de mercado, de conformidad con el principio del operador en una economía de mercado, no existiría ayuda estatal³³.
- 13) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, se deriva del principio de igualdad de trato que el capital puesto por el Estado, directa o indirectamente, a disposición de una empresa en circunstancias que corresponden a condiciones normales del mercado no puede considerarse ayuda estatal. Cuando la participación en el capital o las inyecciones de capital por parte de un inversor público no presenten suficientes perspectivas de rentabilidad, ni siquiera a largo plazo, esa intervención se considerará ayuda en el sentido del artículo 107 del TFUE, y su compatibilidad con el mercado común será evaluada únicamente sobre la base de los criterios establecidos en dicha disposición³⁴.

³² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre>.

³³ Para más detalles, véase la sección 4.2 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal. Cabe señalar que solo pueden tenerse en cuenta los beneficios y obligaciones vinculados al papel del Estado como operador económico, con exclusión de aquellos vinculados a su función como autoridad pública (por ejemplo, si una intervención estatal obedece a motivos de interés público, como la reducción de la brecha digital, el comportamiento del Estado, aun siendo racional desde el punto de vista de la política pública, podría incluir al mismo tiempo consideraciones que un operador en una economía de mercado normalmente no tendría en cuenta).

³⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 1991, República Italiana/Comisión, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136, apartados 20 a 22.

- 14) El cumplimiento de las condiciones de mercado tendría que determinarse *ex ante*³⁵, sobre la base de la información disponible en el momento en que se decidió la intervención (por ejemplo, mediante un plan de negocios basado en evaluaciones económicas comparables a las que, en circunstancias similares, habría llevado a cabo un operador prudente en una economía de mercado para determinar la rentabilidad o las ventajas económicas de la operación). La conformidad de una operación con las condiciones de mercado puede establecerse directamente a través de información de mercado específica de la operación: cuando la transacción se realiza «*pari passu*» por entidades públicas y operadores privados³⁶; o cuando se refiere a la venta y adquisición de activos, bienes y servicios (u otras transacciones comparables) realizadas mediante una licitación competitiva, transparente, no discriminatoria e incondicional³⁷. Si la intervención de los organismos públicos no es "*pari passu*" con la de los operadores privados o no se ha realizado una transacción a través de una licitación, puede ser posible demostrar que la transacción cumple las condiciones de mercado mediante la evaluación comparativa³⁸ u otros métodos de evaluación³⁹. Se aplican consideraciones específicas para determinar si las condiciones de préstamos y garantías se ajustan a las condiciones de mercado⁴⁰.
- 15) En el sector de la banda ancha⁴¹, la Comisión ha aclarado en su práctica decisoria que la conformidad de una inversión pública con las condiciones de mercado puede

³⁵ Las evaluaciones económicas *ex post* que lleven a la conclusión retrospectiva de que la inversión realizada por el Estado miembro de que se trate era realmente rentable no serían suficientes.

³⁶ Véanse los apartados 86 a 88 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal. En particular, para considerar que una transacción se realiza en las mismas condiciones, deben evaluarse los siguientes criterios: a) si la intervención de los organismos públicos y los operadores privados se decide y se realiza en el mismo momento o si ha transcurrido un lapso de tiempo y se ha producido un cambio en la situación económica entre ambas intervenciones; b) si las condiciones de la transacción son las mismas para los organismos públicos y todos los operadores privados implicados, teniendo también en cuenta la posibilidad de aumentar o disminuir el nivel de riesgo con el tiempo; c) si la intervención de los operadores privados tiene un impacto económico real y no es meramente simbólica o marginal; y d) si la posición de partida de los organismos públicos y los operadores privados implicados es comparable por lo que respecta a la transacción, teniendo en cuenta, por ejemplo, su exposición económica anterior con respecto a las empresas en cuestión, las posibles sinergias que pueden lograrse, el grado en que los diferentes inversores soportan costes de transacción similares, o cualquier otra circunstancia específica del organismo público o del operador privado que pudiera falsear la comparación.

³⁷ Véanse los apartados 89 a 96 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

³⁸ Evaluación comparativa a la vista de las condiciones en las que se han producido transacciones comparables realizadas por operadores privados comparables en situaciones comparables. Véanse los apartados 98 a 100 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

³⁹ Véanse los apartados 100 a 105 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

⁴⁰ Véanse los apartados 108 a 114 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

⁴¹ Véase la Decisión de la Comisión C(2007) 6072 final, de 11 de diciembre de 2007, en el asunto C-53/2006 (ex N 262/2005, ex CP 127/2004) — Países Bajos — Citynet Ámsterdam (DO L 247 de 16.9.2008, p. 27) y la Decisión de la Comisión C(2012) 5051 final, de 25 de julio de 2012, en el asunto SA.33063 — Italia — Trentino NGA (DO C 323, p. 6). En el asunto «Citynet Ámsterdam», la Comisión confirmó que la inversión del ayuntamiento de Ámsterdam en una red de fibra al hogar (FTTH) no implicaba ayuda estatal. En el asunto «Trentino», la Comisión expresó serias dudas de que el proyecto cumpliera los criterios para ser considerado acorde con las condiciones de mercado. El proyecto Trentino NGN notificado a la Comisión en 2012 se refería a una asociación público-privada entre la provincia de Trento y Telecom Italia (TI) para el despliegue de una red de próxima generación (NGN) que incluía FTTH en zonas remotas de la provincia. La provincia hizo una contribución en efectivo de 50 millones EUR, mientras que TI haría contribuciones en especie, entre otras: 1) derechos irrevocables de uso (DIU) sobre su infraestructura pasiva existente (conductos y postes) inmediatamente y 2) la propiedad de toda la red de cobre con la perspectiva de migrar a los clientes a la nueva red FTTH que se iba a desplegar. Otros

demostrarse⁴², por ejemplo, si se hace al mismo tiempo⁴³ y en igualdad de condiciones (y, por tanto, con el mismo nivel de riesgos y beneficios) que una participación significativa desde el punto de vista económico de un operador privado (por ejemplo, en capital, importe total, porcentaje del coste total) de un tamaño y una situación comparables que opera en condiciones normales de una economía de mercado («participación simultánea»). El análisis de la simultaneidad constituye un elemento, pero no necesariamente el único, para demostrar la inexistencia de ayuda estatal. Otros elementos también son pertinentes, como la existencia de un plan de negocios sólido *ex ante* (preferiblemente validado por expertos externos) que demuestre que la inversión proporciona una tasa de rendimiento adecuada para el inversor o inversores, en consonancia con el rendimiento normal de mercado que los operadores podrían esperar razonablemente de proyectos similares, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y las expectativas futuras (sobre la base de un cálculo de la tasa interna de rentabilidad de la inversión o en cálculos del valor actual neto)⁴⁴. Como se subrayaba en el asunto, cuando participen en el proyecto inversores privados, es una condición imprescindible que asuman el riesgo comercial vinculado a la inversión en las mismas condiciones que el inversor público, de manera que la inversión pública no entre en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales⁴⁵. La misma lógica se aplicaría también a otros tipos de apoyos estatales, tales como préstamos bonificados o garantías⁴⁶.

dos accionistas se sumaron al proyecto con participaciones financieras más pequeñas. Transcurridos seis años desde la primera contribución o una vez activado un número determinado de líneas en la nueva red, TI podría decidir ejercer una opción de compra y adquirir la totalidad de la propiedad de Trentino NGN. Además, Telecom Italia iba a ser designada proveedor de servicios de Trentino NGN para la construcción y explotación de la red y la prestación de servicios de conectividad. En particular, la Comisión tenía dudas sobre si: a) la valoración de las contribuciones en especie efectuada por Telecom Italia se hizo en condiciones de mercado y no contenía ninguna ventaja oculta para TI, y en concreto, el valor de la red de cobre que iba a ser desconectada; b) existían ventajas ocultas derivadas de los contratos independientes por los que se designa a TI como proveedor de servicios a Trentino NGN y de servicios de conectividad a los usuarios finales; c) el proyecto era realmente rentable desde la perspectiva de un inversor en una economía de mercado; y d) la opción de compra reconocida a Telecom Italia no limitaba los beneficios para las autoridades provinciales de Trento en una medida que un inversor privado no habría aceptado, a la vista del nivel de riesgo asumido por dichas autoridades en calidad de inversor financiero en el proyecto.

42 Véase la Decisión de la Comisión C(2007) 6072 final, de 11 de diciembre de 2007, en el asunto C-53/2006 (ex N 262/2005, ex CP 127/2004) — Países Bajos — Citynet Ámsterdam (DO L 247 de 16.9.2008, p. 27).

43 La existencia de intervenciones estatales consecutivas en relación con el mismo proyecto de infraestructura de banda ancha podría invalidar la conclusión de que un inversor en una economía de mercado también habría emprendido una medida similar. Véase al respecto el apartado 81 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

44 Para más información, véase al respecto el capítulo 4.2 y, en particular, los apartados 101 a 105 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal. Véanse también la Decisión de la Comisión C(2012) 3025 final, de 8 de mayo de 2012, en el asunto SA.22668 (C 8/2008 (ex NN 4/2008) — España — Ciudad de la Luz, estudios cinematográficos (DO L 85 de 23.3.2013, p. 1), y la Decisión de la Comisión C(2012) 5051 final, de 25 de julio de 2012, en el asunto SA.33063 — Italia — Trentino NGA (DO C 323, p. 6).

45 Véase el apartado 17 de las Directrices sobre banda ancha de 2013.

46 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantía (DO C 155 de 20.6.2008, p. 10), y corrección de errores (DO C 244 de 25.9.2008, p. 32).

- 16) La intervención pública en consonancia con el principio del operador en una economía de mercado puede ser pertinente para diversos despliegues de redes, especialmente en zonas urbanas o periurbanas, cuando haya una justificación comercial suficiente para permitir una inversión comercial creíble de socios privados y públicos en condiciones normales de mercado. Por ejemplo, en las zonas urbanas y en los principales corredores de transporte terrestre donde el despliegue de redes 5G puede atraer financiación privada, los Estados miembros pueden considerar hasta qué punto los operadores privados y las entidades públicas podrían participar en un proyecto de despliegue móvil 5G o en un corredor 5G con arreglo a las condiciones normales de mercado, en cuyo caso no habría ayuda estatal. Estos proyectos pueden adoptar la forma de una empresa conjunta o la creación de programas de capital o fondos⁴⁷ para ayudar a los operadores a desplegar nuevas redes o modernizar las existentes, con el objetivo general de atraer inversiones privadas adicionales. Tales medidas no implicarían ayuda estatal si se diseñaran en consonancia con las condiciones normales de mercado.
- a. Explotación de la infraestructura de banda ancha encomendada como servicio de interés económico general (SIEG) de conformidad con los criterios Altmark*
- 17) En algunos casos, los Estados miembros pueden considerar que la instalación de una red de comunicaciones electrónicas debería considerarse como servicio de interés económico general (en lo sucesivo denominado «SIEG») con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE⁴⁸ y la jurisprudencia Altmark y proporcionar financiación pública sobre esta base. En este caso, está excluida la ayuda estatal.
- 18) La compensación por la prestación de servicios de banda ancha definidos como SIEG no implica ayuda estatal si cumple las cuatro condiciones acumulativas siguientes (los denominados criterios Altmark)⁴⁹:
- En primer lugar, el proyecto de infraestructura será necesario para la prestación de auténticos servicios de interés económico general, para la prestación de los cuales se hayan impuesto a la empresa beneficiaria obligaciones de servicio público claramente definidas; en el caso de la banda ancha, esto incluye el cumplimiento de las condiciones relativas a la definición de SIEG establecidas en la sección 3 de las Directrices.
 - En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación se establecerán previamente de forma objetiva y transparente; en el sector de la

⁴⁷ Véanse los apartados 108 a 114 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal.

⁴⁸ Según la jurisprudencia, a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general se les habrá confiado esta misión mediante un acto de los poderes públicos. A este respecto, un servicio de interés económico general podrá confiarse a un operador mediante una concesión de servicio público; véanse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2000, EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Comisión, asuntos acumulados T-204/97 y T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148, apartado 126, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Fred Olsen, SA/Comisión, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, apartados 186, 188 y 189.

⁴⁹ Véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, y la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4).

banda ancha, la compensación debería establecerse *ex ante* para cubrir la diferencia de financiación prevista a lo largo de un período determinado⁵⁰.

- En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones; en el sector de la banda ancha, la compensación debería limitarse a la prestación de servicios de acceso mayorista.
 - En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar las obligaciones de servicio público no se haya realizado según un procedimiento de contratación pública para seleccionar a un candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación se calculará sobre la base de un análisis de los costes de una empresa media bien gestionada⁵¹.
- 19) Cuando al menos uno de los criterios anteriores no se cumple, la intervención pública equivale a ayuda estatal en el sentido del artículo 107 del TFUE. En tales situaciones, la ayuda debería considerarse a la luz de las condiciones de compatibilidad de la Decisión SIEG o del Marco SIEG, teniendo en cuenta las condiciones específicas mencionadas en la sección 3 de las Directrices⁵².

7.2. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LOS CONSUMIDORES

- 20) En determinadas condiciones, puede excluirse que se conceda una ventaja a las empresas constructoras que aceptan bonos, por ejemplo si la medida se concibe como una medida administrativa general. Este puede ser el caso en situaciones en las que el Estado miembro ofrece bonos a consumidores individuales que no realizan ninguna actividad económica para obras de ingeniería civil general, por ejemplo con el fin de garantizar la preparación para aplicaciones inteligentes de nuevas construcciones y/o edificios. En este caso, para excluir la presencia de ayuda estatal, deberían ofrecerse bonos a los usuarios finales para su uso en obras generales para todos los servicios públicos (que pueden incluir, entre otros, la electricidad, el gas, el agua y el cableado en el interior de los edificios). Los usuarios finales tendrán libertad tanto para elegir la empresa de construcción para las obras generales como para conectarse a cualquier operador de servicios públicos (incluidos los operadores de comunicaciones electrónicas) que ofrezca servicios a los locales. La oportunidad de beneficiarse de los bonos debería ofrecerse de forma transparente y no discriminatoria a todos los operadores interesados (no solo a los operadores de

⁵⁰ Véase la Decisión C(2016) 7005 final de la Comisión, de 7 de noviembre de 2016, en el asunto SA.37183 (2015/NN) – Francia – Plan nacional de red de muy alta velocidad (DO C 68 de 3.3.2017, p.1).

⁵¹ En algunos de sus asuntos de banda ancha, la Comisión ha reconocido la inexistencia de ayuda estatal debido a que se reunían los criterios Altmark, por ejemplo, en la Decisión de la Comisión C(2004) 4343 final, de 16 de noviembre de 2004, en el asunto N381/2004 — Francia — Proyecto de red de telecomunicaciones de alta velocidad en Pirineos Atlánticos (DO C 162 de 2.7.2005, p. 5), la Decisión de la Comisión C(2009) 7426 final, de 30 de septiembre de 2009, SA.21630 (N 331/2008) — Francia — Red de muy alta velocidad en Hauts-de-Seine (DO C 256 de 23.9.2010, p. 1), y la Decisión de la Comisión C(2016) 7005 final, de 7 de noviembre de 2016, en el asunto SA.37183 (2015/NN) – Francia – Plan nacional de red de muy alta velocidad (DO C 68 de 3.3.2017, p. 1).

⁵² En tales casos, las medidas tendrían que diseñarse de conformidad con la Decisión SIEG o el Marco SIEG, teniendo en cuenta las condiciones específicas expuestas en la sección 3 de las presentes Directrices o podrían diseñarse de conformidad con los criterios Altmark.

comunicaciones electrónicas, o estar destinados a ellos, sino que deberían estar abierta a todos los servicios públicos pertinentes, como la electricidad, el gas, el agua, etc.).

8. SIN EFECTO SOBRE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE ESTADOS MIEMBROS NI FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA

- 21) En los casos cubiertos por el Reglamento *de minimis*⁵³ con importes muy bajos de ayuda pública o por el Reglamento SIEG *de minimis*⁵⁴, el falseamiento de la competencia puede excluirse *a priori*. En los casos que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento *de minimis*, no es necesaria la aprobación previa de la Comisión. Los Estados miembros ni siquiera tienen que informar a la Comisión de este apoyo público.
- 22) Los servicios prestados a través de puntos de acceso wifi creados en edificios de la administración pública con el fin de facilitar el acceso a los servicios del sector público y la información a los ciudadanos no pueden falsear o amenazar falsear la competencia en determinadas condiciones⁵⁵.

⁵³ Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas *de minimis* (DO L 352 de 24.12.2013, p. 1).

⁵⁴ Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas *de minimis* concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8).

⁵⁵ La actividad no se consideraría económica y, por tanto, no entraría en las normas sobre ayudas estatales si solo los servicios públicos y los contenidos del sector público fueran accesibles a través de dichas redes wifi (sitios web del sector público y sitios web de proveedores de servicios públicos), garantizando la libre accesibilidad de los servicios públicos en línea, que también estarían disponibles gratuitamente fuera de línea (por ejemplo, información administrativa, administración electrónica o información turística no comercial). Para preservar el carácter no económico, los Estados miembros no deberían permitir la explotación comercial de la nueva red para prestar servicios de banda ancha a usuarios residenciales o empresariales, limitando así los riesgos de sustituibilidad a un acceso ilimitado de banda ancha a internet y reduciendo los riesgos de falseamiento de la competencia con respecto a terceros que ofrecen contenidos o servicios similares [Decisión de la Comisión C(2007) 2200, de 30 de mayo de 2007, en el asunto NN24/2007 — República Checa — Red inalámbrica municipal de Praga (DO C 141 de 26.6.2007, p. 2)].

ANEXO III - INTERVENCIONES FRECUENTES EN APOYO A LA BANDA ANCHA

- 1) En su práctica decisoria, la Comisión ha observado algunos mecanismos de financiación recurrentes utilizados por los Estados miembros para fomentar el despliegue de la banda ancha, que suelen constituir ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, a menos que la financiación se lleve a cabo en condiciones de mercado de conformidad con el principio del inversor en una economía de mercado (véase el anexo II). La siguiente lista, de carácter ilustrativo y no exhaustivo, explica cómo las autoridades públicas podrían desarrollar diferentes formas de apoyo al despliegue de la banda ancha o cómo se apartan de los modelos descritos.
- 2) **Modelo de diferencia de financiación:** en el modelo de diferencia de financiación, el Estado miembro apoya el despliegue de redes fijas o móviles financiando la diferencia entre lo que es viable desde el punto de vista comercial y el objetivo que pretende alcanzar la autoridad que concede la ayuda⁵⁶. El Estado miembro⁵⁷ concede subvenciones monetarias directas o subvenciones a los inversores en la banda ancha⁵⁸ para diseñar, construir, gestionar y explotar comercialmente una red, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable. En el modelo de diferencia de financiación, el beneficio razonable se determina como la tasa de rendimiento del capital que requeriría un inversor, teniendo en cuenta el nivel de riesgo específico del sector de la banda ancha y el tipo de servicios prestados. La tasa de rendimiento del capital exigida viene determinada normalmente por el coste medio ponderado del capital («CMPC»). Para determinar qué constituye un beneficio razonable, los Estados miembros podrán introducir criterios incentivadores, relativos, en particular, a la calidad del servicio prestado y al incremento de la eficiencia productiva. El incremento de la eficiencia no debe reducir la calidad de los servicios prestados. Cualesquiera retribuciones vinculadas al incremento de la eficiencia productiva deben fijarse a un nivel que permita repartir de forma equilibrada dicho incremento entre el inversor en la banda ancha y el Estado miembro o los usuarios finales. Con arreglo al modelo de diferencia de financiación, la infraestructura construida es propiedad plena del beneficiario de la ayuda, que asume los riesgos que trae consigo la construcción de nuevas infraestructuras y atraer a suficientes clientes.
- 3) **Ayuda en especie:** en este caso, los Estados miembros apoyan el despliegue de banda ancha fija o móvil poniendo a disposición de los operadores de comunicaciones electrónicas infraestructuras existentes o de nueva construcción. Este apoyo puede adoptar muchas formas, aunque lo más frecuente es que los Estados miembros faciliten infraestructuras pasivas de banda ancha mediante la realización de obras de ingeniería civil (por ejemplo, las obras de excavación en una carretera), la colocación de conducciones o de fibra oscura o dando acceso a infraestructura existente (por ejemplo, conducciones, postes o torres).

⁵⁶ «Diferencia de financiación» se refiere a la existente entre los costes de inversión y los beneficios esperados durante la vida útil de la red.

⁵⁷ O cualquier otra autoridad pública que otorgue la ayuda.

⁵⁸ El término «inversores» designa a empresas u operadores de red de comunicaciones electrónicas que invierten en la construcción y despliegue de infraestructuras de banda ancha.

- 4) Modelo de inversión directa: en el modelo de inversión directa, el Estado miembro construye una red fija o móvil y la explota directamente a través de una rama de la administración pública o a través de un operador interno⁵⁹. La red financiada por el Estado suele explotarse como una red exclusivamente mayorista con el fin de ponerla a disposición de los proveedores de servicios minoristas de banda ancha de forma no discriminatoria.
- 5) Modelo de concesionario: en el modelo de concesionario, el Estado miembro financia el despliegue de una red de comunicaciones electrónicas de banda ancha fija o móvil, que sigue siendo de propiedad pública, pero cuya explotación se ofrecerá mediante un procedimiento de selección competitiva a un proveedor de comunicaciones electrónicas para que la gestione y explote comercialmente. La red puede ser gestionada por un operador de comunicaciones electrónicas para prestar únicamente servicios mayoristas o, alternativamente, para prestar servicios tanto mayoristas como minoristas.

⁵⁹ Decisión de la Comisión C(2011) 7285 final de 19 de octubre de 2011, en el asunto N 330/2010 — Francia — Programa nacional de red de muy alta velocidad - Parte B (DO C 364 de 14.12.2011, p.2), que abarcaba diversas modalidades de intervención, entre ellas una en que las colectividades territoriales pueden operar sus propias redes de banda ancha en la modalidad de ejecución estatal.

ANEXO IV — INFORMACIÓN QUE DEBEN PUBLICAR LOS ESTADOS MIEMBROS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

La información sobre las adjudicaciones individuales a que se refiere el apartado 202, letra b), de las Directrices debe incluir lo siguiente⁶⁰:

— Identidad del beneficiario de la ayuda individual

— nombre

— identificador del beneficiario de la ayuda

— Tipo de beneficiario de la ayuda en el momento de la solicitud:

— pyme

— gran empresa

— Región en la que está establecido el beneficiario de la ayuda, a nivel NUTS 2 o inferior

— Principal sector o actividad del beneficiario de la ayuda en cuestión, identificado por el grupo de la NACE (código numérico de tres dígitos)⁶¹

— Elemento de ayuda, expresado en valores enteros en moneda nacional. En los regímenes en forma de ventaja fiscal, la información sobre los distintos importes de ayuda individual⁶² puede facilitarse en los intervalos siguientes (en millones EUR):

— [0,1-0,5]

— [0,5-1];

— [1-2];

— [2-5];

— [5-10];

— [10-30];

— [30-60];

— [60-100];

— [100 y más].

— Cuando sea diferente del elemento de ayuda, el importe nominal de la ayuda, expresado en valores enteros en moneda nacional ⁶³

⁶⁰ Con excepción de los secretos comerciales y otra información confidencial en casos debidamente justificados y previo acuerdo de la Comisión [Comunicación de la Comisión relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, C(2003) 4582 (DO C 297 de 9.12.2003, p. 6)].

⁶¹ Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

⁶² El importe que debe publicarse es el del máximo beneficio fiscal permitido y no el importe deducido de cada año (por ejemplo, en el contexto del crédito fiscal, se publicará el máximo crédito fiscal permitido y no el importe real, que podría depender de los ingresos imponibles y variar cada año).

⁶³ Equivalente en subvención bruta o, en su caso, importe de la inversión. Para las ayudas de funcionamiento, puede proporcionarse el importe anual de la ayuda por beneficiario de la ayuda. En el caso de los regímenes fiscales, este importe puede facilitarse por los tramos establecidos en el apartado 139. El importe que debe publicarse es el beneficio fiscal máximo autorizado y no el importe deducido

- Instrumento de ayuda⁶⁴:
 - subvención/bonificación de intereses/condonación de la deuda
 - préstamo/anticipos reembolsables/subvención reembolsable
 - garantía
 - ventaja fiscal o exención fiscal
 - financiación de riesgo
 - otros (especifíquense)
 - Fecha de concesión y fecha de publicación
 - Objetivo de la ayuda
- Identidad de la autoridad o autoridades otorgantes
- En su caso, nombre de la entidad encargada y nombres de los intermediarios financieros seleccionados
- Referencia de la medida de ayuda, tal como figura en la Decisión aprobada con arreglo a las presentes Directrices.

cada año (es decir, en el contexto de un crédito fiscal, se publicará el crédito fiscal máximo autorizado y no el importe real, que podría depender de los ingresos imposables y variar cada año).

⁶⁴ Si la ayuda se concede a través de múltiples instrumentos, el importe de la misma se especificará por instrumento.

ANEXO V — INFORMACIÓN QUE DEBEN FACILITAR LOS ESTADOS MIEMBROS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

El informe mencionado en el apartado 208 de las Directrices debe incluir información, para el período de referencia pertinente y para cada proyecto individual ejecutado en aplicación de una medida de ayuda aprobada con arreglo a las presentes Directrices, sobre lo siguiente:

- Nombre del beneficiario o beneficiarios de la ayuda
- Coste total (o coste total estimado) del proyecto y coste medio por local atravesado (según la definición del apartado 10 del anexo I)
- Importe de la ayuda concedida y gasto de la ayuda
- Intensidad de la ayuda
- Fuentes de financiación pública
- Tasas de cobertura antes y después de la intervención estatal (en términos absolutos y porcentuales);
- Para los proyectos de apoyo al despliegue de infraestructuras de comunicación electrónica:
 - Fecha de puesta en servicio de la infraestructura;
 - Tecnología desplegada en la infraestructura financiada con fondos estatales;
 - Velocidades mínimas y medias (de carga y descarga) de los servicios prestados;
 - Productos de acceso mayorista ofrecidos, incluidas las condiciones de acceso y precios y la metodología para determinar los precios. Productos de acceso mayorista solicitados sobre la base de una demanda razonable y tratamiento de dichas solicitudes;
 - Número de solicitantes de acceso y proveedores de servicios que utilizan el acceso mayorista;
 - Número de hogares y empresas atravesados por la infraestructura financiada con fondos estatales;
 - Índices de utilización.
- Para proyectos de apoyo a la utilización de servicios de comunicaciones electrónicas, como los bonos:
 - Duración de la medida de ayuda;
 - Valor de los bonos;
 - Abonos/servicios que reciben apoyo, incluido el apoyo para dispositivos de atención al cliente o para el cableado dentro del edificio o el tendido de cables dentro de un dominio privado;

- Índices de utilización y número de usuarios finales que se han beneficiado de la medida de ayuda (por categoría, por ejemplo, usuarios finales individuales, pymes y por tipo de abono/servicios que reciben apoyo);
- Número de proveedores de servicios de banda ancha subvencionables;
- Número de proveedores de servicios de banda ancha que se han beneficiado realmente de la medida de ayuda;
- Evolución de la posición de mercado de los operadores por tipo de abonos/servicios que reciben apoyo, teniendo en cuenta la infraestructura y las tecnologías pertinentes (FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA, etc.);
- Precios mayoristas y minoristas antes y después de la aplicación de la medida.